



# Un documento que apuesta al futuro

**H**ace 12 años las Fuerzas Armadas y de Orden negaron parte importante de los antecedentes sobre abusos de los derechos humanos que consignó en su oportunidad el Informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación. El pasado jueves ocho tenientes generales (R), que desempeñaron funciones de mando durante el gobierno militar y que fueron cercanos colaboradores del general (R) Pinochet, condenaron dichos delitos y las exhumaciones ilegales de restos de detenidos desaparecidos a través de un documento de relevancia histórica. El contrapunto aquí es tan evidente como valioso y se suma a otros elementos que configuran una aparentemente inédita posibilidad de avanzar en una solución para la piedra de toque de la transición.

El documento de los ocho uniformados, valioso en sí mismo, constituye además un fuerte espaldarazo para el "nunca más" del comandante

en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre, quien ha jugado todo su capital político al promover estas señales que aún despiertan resquemores en algunos sectores de su institución. Esto quiebra, asimismo, esa supuesta división que en materia de derechos humanos distanciaba al actual Ejército de aquel que gobernó con Pinochet.

El objetivo de las palabras de Cheyre es el mismo que persiguen estos ocho uniformados: permitir, por una parte, que el Ejército pueda volcarse del todo a su proceso de modernización y a sus tareas institucionales y, por otra, reciprocidad de las demás instituciones del país.

Ese último punto es de gran relevancia en la perspectiva del Ejército, que siente que ha movido todas sus piezas en busca de una respuesta. Aunque cada vez parece haber mayor consenso de parte de los sectores castrenses del daño que le produjeron al país los abusos contra los derechos humanos, también existe la certeza de que el Ejército no puede seguir paralizado en un clima judicial permanente y se requieren, por tanto, definiciones de la justicia y del gobierno que ayuden a salir de ese cuadro.

No tiene sentido legal, ni contribuye tampoco al clima político del país, que haya uniformados procesados por el secuestro de personas cuyos cuerpos habrían exhumado ilegalmente. La mantención de situaciones como ésta a través del tiempo sólo prolongará una etapa que puede ir cerrándose si existe voluntad política de todos los grupos.

Como sea, es evidente que en el marco de los 30 años del golpe militar se ha instalado en Chile un inédito clima que inició, paradójicamente, el

**El documento que suscribieron los ocho tenientes generales (R) -quienes desempeñaron funciones de mando durante el gobierno militar- constituye un fuerte espaldarazo para el "nunca más" del comandante en jefe del Ejército, Juan Emilio Cheyre.**

partido que más se ha identificado con el gobierno del general (R) Pinochet, la UDI. El hecho de que haya sido esa colectividad la que puso -casi al pasar en un programa televisivo- este tema en el debate y que, además, entregara una propuesta de solución, constituye otro hito de la transición que cabe destacar. Aunque algunos sectores han cuestionado la propuesta de ese partido y su legitimidad ética para plantearla, al menos permitió que el país saliera del statu quo en que este problema había quedado luego de la mesa de diálogo. Instancia que, pese a su enorme simbolismo, no se tradujo en los resultados esperados en cuanto a ubicar el destino de los detenidos desaparecidos.

Es claro que Chile se encuentra en una situación de mayor madurez política e institucional que hace cinco años, e incluso que durante la propia mesa de diálogo, para encarar este problema pendiente. La pregunta es si esta disposición permitirá o no avanzar en una solución definitiva. Ello dependerá del modo en que aprovechan las oportunidades quienes tienen la responsabili-

dad política.

El gobierno entregará en las próximas semanas -a partir de las propuestas de reparación que hicieron todos los sectores políticos- un proyecto que debiera orientar las definiciones en este sentido. No sólo aquellas relativas a la reparación de los familiares de detenidos desaparecidos, aunque éstas sean el objetivo central del proyecto. El borrador de La Moneda también tendría que entregar luces o dar señales al Ejército y a la clase política.

**Al jugarse por superar el pasado, el Ejército -activo y en retiro- apuesta también porque sus gestos encuentren reciprocidad en otros sectores del país.**

No hay transiciones perfectas ni procesos políticos que puedan cerrarse automáticamente. La experiencia internacional confirma lo anterior. Pero hay mejores formas de concluir las etapas y de permitir que los países dejen atrás aquellos episodios de su pasado que los siguen dividiendo. Ello implica un esfuerzo del gobierno, de la clase política y de la justicia por igual. Chile está en el momento preciso para aprovechar las oportunidades que ofrece el actual escenario: la salida del general (R) Pinochet de la escena política y los gestos de aquellos sectores que participaron o apoyaron su gobierno son un punto de partida importante. La palabra ahora la tiene la clase política.